

# Una actitud sospechosa

MAURICIO MERINO

No creo que el gobierno haya diseñado la iniciativa de reforma política para distraer la atención de la clase política de otros asuntos públicos de mayor relevancia, ni mucho menos para polarizar a la sociedad otra vez. Supongo, al contrario, que el presidente Calderón y sus colaboradores propusieron la reforma política porque creen en las bondades de su contenido, y porque les gustaría modificar el régimen para colmar su déficit democrático y darle mayor poder a los ciudadanos, así como dicen.

Lo que despierta mis dudas es la actitud belicosa que han adoptado sus distintos voceros, para descalificar de entrada a quienes hemos formulado críticas puntuales a la iniciativa. Yo mismo ya he visto mi nombre entre las listas de un nuevo grupo de conjurados en contra del gobierno de la República, por haber participado en un seminario que convocó el Senado para hablar sobre las bondades y los defectos de esa reforma, e incluso he sentido de modo directo la hostilidad que generó mi opinión divergente. Como en los viejos tiempos autoritarios —de los que el gobierno reniega en público— dejamos atrás un verdadero debate para meternos en un *tour de force*. Un problema de fondo, que sin embargo no acepta ideas sino pura aritmética.

Cuesta trabajo participar en una discusión de esa naturaleza, porque cualquier argumento que se oponga a la iniciativa oficial será descalificado por razones morales o porque oculta falacias. Cuesta, porque en realidad significa la cancelación del debate. Es una lástima, por ejemplo, que entre las 38 estratagemas sugeridas por Schopenhauer para tener razón siempre, figuren las empleadas por el gobierno; es decir, las que descalifican los argumentos contrarios porque quien los dice pertenece a una moralidad diferente o porque persigue —según ellos— la aviesa intención de contradecir cualquier cosa que provenga del gobierno. Como si no se tratara de impulsar una reforma ganada gracias al consenso inteligente de todas las partes, sino de imponer la visión propia.

Pero ocurre que en un asunto tan delicado como la reforma del régimen, aun cuando los cambios propuestos por el gobierno sean limitados, la primera condición que habría de ponerse tendría que ser la reflexión más sensata y la mayor prudencia política. Y lo cierto es que,

más allá de la violencia verbal que han empleado sus partidarios, la reforma propuesta por el gobierno merece esa revisión mucho más cautelosa para cobrar una forma definitiva. No sólo porque se trata de una miscelánea y no de un bloque articulado y coherente, sino porque cada una de las mudanzas generaría, a su vez, la necesidad de realizar nuevas modificaciones en una verdadera cascada de cambios. La mayor parte, alteraría las reglas electorales y el sistema de partidos y, en el caso de la reelección de alcaldes y regidores, la conformación constitucional de los ayuntamientos y las reglas vigentes del federalismo. No es poca cosa.

Por lo demás, si el argumento central del gobierno consiste en el reconocimiento del déficit democrático del país y en la búsqueda de mayores capacidades de decisión a los ciudadanos, cabe preguntarse por qué no intenta responder a ese déficit con los medios que ya tiene en sus manos. Es difícil conciliar ese argumento con la actitud de la Procuraduría General de la República en contra de la transparencia de sus quehaceres, o con el debate paralelo que se ha despertado tras el intento gubernamental de disminuir las facultades del IFAI. Si de veras se tratara de saldar el déficit democrático que están percibiendo los ciudadanos, el gobierno tendría que decirnos exactamente en qué y cómo se está gastando el dinero público, con la mayor audacia posible. Y tendría que abrir todas las puertas para acceder al servicio público, consolidando el servicio profesional de carrera; y tendría que construir un sistema completo de rendición de cuentas, para que todas las personas sepamos que, tras las elecciones, nuestros gobiernos emplean bien los recursos que tienen, cumplen con sus propósitos y lo hacen de la mejor manera posible. Todo eso está ya en las manos del gobierno de Calderón, y también la oportunidad de probar que de veras quiere saldar ese déficit, con o sin reformas políticas.

Después de todo, y más allá del calor y el tono de los debates o de las descalificaciones de quienes discuten, no hay mayor consistencia argumentativa que probar lo que se dice, con hechos. Y para el gobierno sería relativamente sencillo demostrar que sus palabras son ciertas; tan ciertas como las decisiones que puede tomar en cualquier momento para acercar a los ciudadanos a las tareas de gobierno, en lugar de buscar barroquismos para ganar más poder, mientras lo pierde.

Profesor investigador del CIDE

